

VISIONES/ LOS EXPERTOS RECONOCEN LA RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA EN UN CONTEXTO DIFÍCIL, PERO AVISAN DE QUE SIGUE MUY LIGADA A LOS CICLOS Y SIN CORREGIR SUS DESEQUILIBRIOS ESTRUCTURALES EN PENSIONES, VIVIENDA, EMPLEO O FISCALIDAD.

Las sombras de la economía española frente al triunfalismo del Gobierno

ANÁLISIS

por J. Díaz

Acorralado por los procesos judiciales y los escándalos de corrupción; debilitados sus apoyos en el Congreso, con más derrotas parlamentarias que victorias, y con los Presupuestos para 2026 en el aire, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha aferrado a la resiliencia de la economía y el empleo para construir un relato triunfalista. Los datos macro son ahora su principal estandarte político: “En un contexto de atonía de las economías europeas, España representa el 40% del crecimiento de la zona euro”, dijo Sánchez el domingo durante un acto con militantes del PSOE en Málaga. Dos días después, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, revisó al alza el cuadro macro del Ejecutivo y elevó al 2,7% el crecimiento previsto para este año, situando por encima del 2% el avance del PIB en cada uno de los tres años siguientes (de 2026 a 2028).

¿Está justificado este optimismo? Los expertos reconocen la resiliencia actual de la economía española y descuentan que, a corto y medio plazo, seguirá al frente del crecimiento entre los grandes países del euro, pero avisan de que el horizonte está nublado por las tensiones geopolíticas y comerciales y de que la tendencia apunta a una progresiva pérdida de fuelle. Entre ellos, el Banco de España, que si bien el martes elevó al 2,6% su pronóstico de crecimiento para 2025, alertó de que lo que se atisba en el medio plazo es “una desaceleración gradual de los ritmos de avance” del PIB hacia tasas de crecimiento inferiores al 2% en 2026 y 2027.

Y es que en la economía española no es oro todo lo que reluce. Existen destellos luminosos, pero también importantes zonas de sombra que desaconsejan lanzar las campanas al vuelo. Y no solo en lo que atañe a los grandes datos macro, cuya bonanza, más coyuntural que estructural, no acaba de trasladarse a una parte del tejido empresarial ni a las familias. De hecho, el PIB per cápita de los españoles sigue estando claramente por debajo del promedio de la UE a pesar del fuerte crecimiento de los últimos años, lo que para los economistas es sinónimo de baja productividad, mientras que sus salarios reales apenas han crecido en los últimos años por esa pobre productividad. A eso se añaden fallas o desequilibrios en otros muchos aspectos, muchos estructurales, como el déficit y el endeudamiento públicos, las pensiones, la vivienda, el mercado laboral, la productividad o el modelo fiscal.

Precisamente, un informe publicado ayer por la Fundación Faes, bajo el



La bonanza macro que proyecta el Gobierno no acaba de trasladarse a muchas empresas y familias

título *Economía española: una visión reciente (y de futuro)*, pone sobre el tapete las principales debilidades de la economía española, que siguen siendo muchas. Para empezar, un endeudamiento público que ha crecido como una bola de nieve desde 2007, tendencia que se ha agudizado durante los gobiernos de Sánchez, aumentando en cerca de 470.000 millones en siete años y que en julio superaba los 1,68 billones de euros en términos absolutos. España es el quinto país con más deuda pública de toda la UE. Un pesado y oneroso legado para las futuras generaciones.

Y si bien el déficit se redujo hasta el 3,2% en 2024 y todo apunta a que este año podría bajar de esa cota (hasta el 2,5%, según el Banco de España), su ritmo de adelgazamiento no ha sido parejo al fuerte incremento de los ingresos tributarios registrados en los últimos años, especialmente durante los momentos álgidos del *shock* inflacionista: la recaudación por impuestos se ha disparado casi un 40% desde 2018. Además, esos altos niveles de endeudamiento no combinan bien con “la normalización de las prórrogas presupuestarias”, lo que “genera incertidumbre y mina la credibilidad

de la economía en la escena internacional”, resalta el informe de la Fundación que preside José María Aznar.

Entre los problemas estructurales aún sin resolver figura el sistema público de pensiones. Pese a las reformas de los últimos años, la sostenibilidad del sistema sigue en tela de juicio. Y prueba de ello es que si bien desde 2018 las cotizaciones sociales han aumentado un 35%, sobrecargando cada vez más al tejido empresarial, las transferencias y préstamos del Estado para hacer frente a los pagos lo ha hecho más de un 146%, lo que pone de manifiesto que el fuerte aumento de cotizaciones “es manifiestamente insuficiente para cubrir el nuevo gasto en pensiones”, señala el documento. Y todo ello en un contexto en el que el ingente gasto en pensiones reduce cada vez más el margen para encarar otras inversiones productivas, ya sea en vivienda, educación o infraestructuras, capítulo en el que España arrastra un déficit relevante.

So pretexto de que la presión fiscal en España sigue siendo inferior al promedio de la UE, cuando la realidad es que el esfuerzo tributario que realizan los españoles es mayor que la media comunitaria, los cambios acometidos por el Gobierno en los últimos años en el sistema fiscal han consistido esencialmente en subidas de impuestos a la banca, a las energéticas, a los altos patrimonios... pero también al conjunto de empresas y trabajadores por la vía de crecientes

cotizaciones sociales. Sin embargo, sigue estando pendiente una reforma que dote a España de un sistema capaz de recaudar los recursos necesarios para sufragar el gasto público de manera sostenible financieramente.

El mercado laboral ha mostrado una evolución claramente positiva en los últimos años, alcanzando el récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social (“¡Lo nunca visto!”, dijo Sánchez el domingo), pero sigue padeciendo deficiencias importantes, como la precariedad en muchos empleos; una tasa de temporalidad todavía elevada (en el sector público ronda el 30%), pese a haber sido enmascarada por la figura del fijo-discontinuo; y un crecimiento del empleo sustentado en la llegada de mano de obra inmigrante que no ha logrado dejar atrás su ligazón a los cambios de ciclo; esto es, “creando empleo y creciendo más que sus homólogos en épocas de bonanza y acusando con fuerza las recesiones y destruyendo empleo” en la de vacas flacas, como subraya el informe de Faes. Y todo ello en un contexto en el que la Educación sigue sin estar adaptada a la realidad y necesidades del mercado laboral y presenta altas tasas de abandono escolar y de *ninis*; es decir, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que suponen el 12% de la población de 15 a 29 años en España, la octava tasa más alta de la UE en 2024.

¿Y la vivienda? Aunque el Gobierno insiste en que el acceso a la vivienda es una cuestión prioritaria, sus políticas no han servido hasta ahora para mitigar el fuerte desajuste entre oferta y demanda y, por ende, los altos precios de los inmuebles tanto en compra como en alquiler (los primeros han crecido de media un 25% desde 2018 y los segundos un 56%). Al contrario, sus afanes intervencionistas han inhibido la oferta, especialmente en el mercado de arrendamiento con medidas como el control del precio de los alquileres, pero sigue sin resolverse la raíz del problema, que es la falta de suelo edificable y el muro que suponen las numerosas trabas normativas. Ha intentado sacar adelante una Ley del Suelo que demandan CCAA y ayuntamientos, pero no ha logrado el apoyo parlamentario necesario. Si en la década de 1980 se construían más de 100.000 viviendas de protección oficial, la cifra hoy ronda las 14.000.

En resumen, no se puede negar que la economía vive, desde el punto de vista macro, un momento dulce, que destaca sobre todo en un contexto europeo de debilidad, pero su evolución sigue muy ligada a los ciclos, sin que la mayoría de sus desequilibrios estructurales se hayan corregido, o lo hayan hecho con la eficacia necesaria.

El PP plantea devolver poder adquisitivo a las familias por vía fiscal

J. Portillo. Madrid

Revisar el gasto público para generar margen fiscal con el que devolver poder adquisitivo a las familias mediante rebajas de impuestos. Esta es una de las líneas maestras del plan económico con el que el PP aspira a erigirse en alternativa de Gobierno, según reveló ayer el nuevo vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del partido, Alberto Nadal.

“El Partido Popular quiere ofrecer una alternativa que devuelva el poder adquisitivo a las familias, que devuelva la ilusión a las empresas, que cree empleo, para que veamos que nuestros hijos van a vivir mejor que la generación anterior y podamos acercarnos a la renta de los países más ricos de Europa”, expuso ayer Nadal. “Lo vamos a hacer con un proceso de modernización del país, adelgazando la administración pública en los gastos que no son necesarios, devolviendo parte de la recaudación fiscal a los españoles por el esfuerzo que han realizado”, detalló, en referencia a la carga fiscal añadida que ha supuesto la inflación.

Nadal prometió que estas medidas se aplicarían “inmediatamente después de que el Partido Popular gane las próximas Elecciones Generales”. “Esperamos que sean cuanto antes porque el Gobierno actual lo único que nos ofrece es más de lo mismo, parálisis y perder el tiempo”, sostuvo en un encuentro con prensa celebrado en la sede del partido en la madrileña calle Génova.

Nadal cargó, por ejemplo, contra la reciente cesión del Gobierno ante Junts que pasa por obligar a todas las compañías medianas y grandes del país a atender en catalán, lo que “impone costes innecesarios a las empresas españolas”.

Reparos al cuadro macro

En cuanto al nuevo cuadro macro del Gobierno que eleva el alza de PIB al 2,7% este año, el nuevo responsable de Economía del PP alegó que pese al “importante crecimiento” que se está registrando, las cifras ya reflejan una paulatina desaceleración, mientras que “el 90% de los españoles considera que ha perdido poder adquisitivo y por tanto estamos lejos de que las cifras macro se traduzcan en prosperidad de las familias”.